



19 de marzo de 2025

Aquel viaje a México del asesino de Kennedy
Pascal Beltrán del Río
Excélsior

Ayer por la tarde, el gobierno estadounidense hizo públicos lo que se supone que son todos los expedientes en su poder sobre el homicidio del presidente John F. Kennedy en 1963.

El cúmulo de documentos es enorme y pasarán muchos días antes de que se pueda hacer una evaluación respecto de si revelan algo, distinto de lo que ya se sabe, sobre uno de los crímenes políticos más notorios de la historia mundial.

Buena parte de los archivos ya se habían dado a conocer, pero seguían testados, es decir, porciones de los mismos no podían ser leídos por razones de seguridad nacional. Mediante una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump decidió que se hiciera pública, de forma íntegra, toda la información oficial sobre los magnicidios de los años 60, incluyendo los de Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr.

Una opinión relevante sobre el peso informativo de los documentos dados a conocer ayer, y qué tanto se cumplió la promesa de Trump, es la del periodista Jefferson Morley, exreportero del diario The Washington Post, quien se ha dedicado a desentrañar varios aspectos del asesinato de Kennedy y las investigaciones sobre el crimen, entre ellos el papel que jugó en esa trama el jefe de la contrainteligencia estadounidense James Angleton.

“La primera revelación de expedientes sobre el caso Kennedy en este 2025 es alentador”, escribió anoche en la red social X. “Ahora tenemos versiones completas de aproximadamente un tercio de los documentos testados en poder de los Archivos Nacionales (...) Estos registros, secretos por largo tiempo, hacen luz sobre la desconfianza que Kennedy tenía en la CIA, los intentos de asesinato de (Fidel) Castro, la vigilancia de Oswald en la Ciudad de México y las operaciones de propaganda de la CIA que involucraban a Oswald (...) Es la mayor desclasificación de documentos sobre Kennedy desde los años 90”.

Cuando habla de la Ciudad de México, Morley se refiere al viaje que realizó Lee Harvey Oswald a esta capital semanas antes de asesinar a Kennedy en Dallas. El exinfante de Marina llegó a bordo de un autobús de la línea Flecha Roja, se hospedó en un hotel del Centro Histórico y acudió a las embajadas de la Unión Soviética y de Cuba, con la esperanza de obtener un visado para volver a la URSS, país donde había vivido entre 1959 y 1962 y se había casado.

En 2007 pude obtener la primera entrevista en la que Oleg Nechiporenko, jefe de contrainteligencia de la KGB en México, relató lo que sucedió durante la visita de Oswald a la misión diplomática, cuyo personal le negó la expedición de la visa porque debía realizar la petición desde Estados Unidos. En estas mismas páginas usted puede encontrar una versión de aquella conversación sostenida en Moscú.

La primera revisión de la abundante documentación revela la manera en que la CIA practicaba el espionaje telefónico en México durante la Guerra Fría. No sólo eran blanco de ella las embajadas de la URSS y otros países del mundo socialista –como

Cuba, Polonia y Yugoslavia—, sino muchos individuos como la secretaria del expresidente Lázaro Cárdenas y el psiquiatra de Juana Cuevas, la hermana del líder cubano Fidel Castro, quien había sido reclutada por la agencia.

Los archivos, que ahora se pueden conocer sin partes censuradas, refieren las direcciones de domicilios particulares cuyas líneas telefónicas eran pinchadas e incluso situaciones que hoy se ven jocosas, como la interrupción de las actividades clandestinas de la CIA por culpa de los coyotes que vendían por su cuenta las líneas de la entonces empresa estatal Teléfonos de México.

Aquellas operaciones de espionaje parecen cosa de un pasado lejano, pero no se ha detenido la costumbre de las agencias de inteligencia de conocer las conversaciones privadas de políticos extranjeros encumbrados, como ahora se sabe por la intervención del celular de la presidenta Claudia Sheinbaum, cosa que ella misma reconoció esta semana.

Apenas acaban de comenzar a caer las piezas faltantes en el rompecabezas del asesinato de Kennedy, por lo que puede esperarse más información en los días siguientes.

Aquel viaje a México del asesino de Kennedy
Pascal Beltrán del Río
Excélsior

La versión de la FGR en el caso de Teuchitlán
Mario Maldonado
El Universal

Este miércoles, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, saldrá a una conferencia de prensa que, en esencia, busca dar elementos para que las autoridades federales atraigan el caso del Rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, Jalisco.

A diferencia de ocasiones anteriores, en las que la cabeza del Ministerio Público aparecía en la llamada Conferencia del Pueblo, el reporte se dará por separado, entre otras cosas porque la presidenta Claudia Sheinbaum quiere estar lo más lejos posible del tema y evitar que le ocurra lo que a Enrique Peña Nieto con el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el reporte expone que la Fiscalía de Jalisco cometió diversas omisiones en la investigación, ya que las autoridades locales tenían conocimiento de la existencia del rancho desde el año pasado cuando se llevó a cabo un operativo de la Guardia Nacional que derivó en el aseguramiento del predio. El resultado fueron 10 personas detenidas, un cadáver y la liberación de dos secuestrados.

"No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado; esa información es fundamental", dijo la semana pasada el fiscal Gertz Manero, por lo que se anticipa que las nuevas averiguaciones no sólo irán enfocadas a la actividad del crimen organizado en la zona, que habría convertido al rancho un "centro de reclutamiento y entrenamiento", sino contra varios funcionarios estatales y municipales.

Lo que es un hecho que ni la FGR ni las autoridades locales podrán negar es el avance del crimen organizado en Jalisco, al grado de que el CJNG se ha convertido en el grupo más poderoso del país por su capacidad de fuego, sus numerosas filas y la diversidad de negocios en los que participan.

Los funcionarios y políticos jaliscienses tomaron como una amenaza directa de este cártel el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, ocurrido a finales del 2020 cuando el emecista Enrique Alfaro ya era gobernador. Otro antecedente fue el ataque al exfiscal Luis Carlos Nájera, en 2018, en un restaurante en Guadalajara.

El problema fue que desde la federación se mandaron señales de que la estrategia contra el crimen, promovida por Andrés Manuel López Obrador, sería la de "abrazos no balazos". Los gobernadores de zonas complejas en materia de seguridad, ya sea morenistas o de oposición, decidieron apartarse del tema.

Consultado para este texto, un exsecretario de seguridad estatal aseguró que la premisa de combatir al crimen cambió radicalmente con la llegada de Morena a la Presidencia: "Si no entran desde el gobierno federal a combatirlo y se debilitan las instituciones de seguridad, tampoco entramos nosotros".

Con más margen de maniobra, el crimen organizado instauró una nueva estrategia que denominaron “limpiar la basura”; es decir que los propios delincuentes debían evitar llamar la atención y limpiar los restos de los delitos cometidos en la vía pública. “Así comenzaron a incrementar de manera exponencial los números de desaparecidos en el país”.

Un ejemplo de aquella “limpieza” que debían hacer los criminales fue cuando, en marzo del 2023, cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas; dos de ellos fueron encontrados muertos en una comunidad rural llamada Ejido Longoreño, luego de la presión que ejerció el gobierno de Estados Unidos.

Es por ello que hay indicios de que el horror que quedó al descubierto en Jalisco pueda replicarse en entidades como Baja California, de Marina del Pilar; Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla; Sonora, de Alfonso Durazo; Sinaloa, de Rubén Rocha; Nayarit, de Miguel Ángel Navarro; Colima, de Indira Vizcaíno; Chiapas, de Eduardo Ramírez; y Tabasco, de Javier May, entre otros.

La complejidad de las labores de investigación que tendrá que hacer la Fiscalía General, además de lo que ya de por sí implica ir por la delincuencia organizada, estará en enfocar los resultados de las pesquisas a las omisiones de las autoridades locales, toda vez que hay una solicitud expresa de dejar fuera cualquier argumento que apunte a presuntas responsabilidades del gobierno de López Obrador, debido a que fueron elementos del orden federal los primeros en realizar labores en el Rancho Izaguirre.

La versión de la FGR en el caso de Teuchitlán
Mario Maldonado
El Universal

¿119 para dar con 53 mil desaparecidos?

Carlos Marín

Milenio

El reciente 3 de marzo, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, desglosó el más reciente informe sobre “cuerpos sin nombre o nombres sin cuerpo” y actualizó la dimensión de la tragedia:

“Para 2018, cuando prometió evitar que la gente siguiera desapareciendo y encontrar a los desaparecidos, con López Obrador se hizo el Sistema Nacional de Búsqueda, pero a seis años lo que tenemos son muchas más desapariciones que en los sexenios anteriores: 250 por ciento más que con Calderón. Sólo con AMLO hubo 53 mil 263 desaparecidos y no localizados, y en 2024 más del 30 por ciento que en 2023. Y no solo: en cinco meses de Claudia Sheinbaum ya llevamos 11 mil 942 desapariciones: 27 por ciento más que en el mismo periodo del primer año de López Obrador...”.

En desapariciones comenzó a legislarse en 2014, después de ocurridas las de normalistas de Ayotzinapa, y en 2017 se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, cuya función fue pervertida por AMLO cuando le ordenó reducir la cifra de desaparecidos y le bajó considerablemente su presupuesto.

Según Morera, en los gobiernos anteriores a la 4T “había menos indolencia. No es que fueran perfectos, pero no eran amorales”.

Ante los tétricos hallazgos en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Sheinbaum ofreció:

“Nuestro deber es apoyarlos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y observar para que las Fiscalías y el Poder Judicial hagan cada uno su tarea para encontrar a sus familiares y se sancione a los responsables. Cada autoridad estatal, municipal, federal, fiscalías, Poder Judicial, debe asumir su responsabilidad. Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito sumamente grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse...”.

Morera recuerda que López Obrador “hizo un censo patito con la Secretaría del Bienestar y volvió a desaparecer a los desaparecidos: de 110 mil, quedaron poco más de 12 mil.

Y a cinco meses de iniciado el gobierno de Sheinbaum, “todavía hay dos cifras oficiales: el censo patito de Bienestar en la Secretaría de Gobernación y el del Sistema Nacional de Búsqueda, que pertenece a la Comisión Nacional de Búsqueda, donde aparecen 120 mil”.

En los casos de secuestro, el calderonato dispuso que la atención fuese inmediata, como ahora lo sugiere Sheinbaum, y no después de 24, 48 y hasta 72 horas, ya que el tiempo idóneo para resolver casi cualquier delito es el más inmediato al mismo.

Causa en Común lamenta que las fiscalías especializadas en desaparecidos, incluida la general de la República y la moribunda Comisión de Búsqueda, operen con recursos insuficientes: esta última tiene contratadas 119 personas como buscadoras para todo el país.

Pero si tan solo los desaparecidos en el último año superan los 13 mil, ¿cuántos le tocan a cada “buscador” o “buscadora”...?

¿119 para dar con 53 mil desaparecidos?

Carlos Marín

Milenio